



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Dora Cristina Blandón Valencia
DEMANDADO	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP-
RADICADO	05-001-31-05- 021-2021-00182-01
TEMA	Aplicación convención colectiva - pensión convencional
DECISIÓN	confirma y modifica sentencia

El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **043** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por la señora **DORA CRISTINA BLANDÓN VALENCIA** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-**, con radicado 05-001-31-05-**021-2021-00182-01**.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende se conceda la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo para los trabajadores del ISS, con los correspondientes incrementos y reajustes legales y convencionales. Que se conceda el retroactivo desde que el momento en que tuvo derecho y hasta su pago efectivo, reconocimiento que deberá hacerse al 100 % desde los 50 años de edad y hasta la fecha en que se reconoció la pensión de vejez, reconociendo el mayor valor de allí en adelante. Que se reconozca y pague los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, en subsidio la indexación y costas procesales.

• **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones se sustentan en los hechos siguientes: Manifestó la accionante que nació el 27 de septiembre de 1962. Que laboró desde el 13

de septiembre de 1993 hasta el 31 de marzo de 2015 en el Instituto de Seguros Sociales, sumando 22 años aproximadamente en la entidad. Que las relaciones laborales entre el Instituto de Seguros Sociales y los trabajadores oficiales se rigen por la convención colectiva de trabajo firmada por Sintraiss y posteriormente por Sintraseguridad y que es beneficiaria de la convención desde el año 1996, momento en el cual desapareció la categoría de funcionarios de la seguridad social. Que para el año 2013 cumplía con los requisitos exigidos en la disposición convencional para acceder a la pensión de jubilación. Que la UGPP asumió las obligaciones pensionales como consecuencia de la liquidación del ISS. Que mediante la Resolución RDP 035526 del 31 de agosto del 2015 le fue negado su derecho a la pensión convencional por parte de la UGPP señalando que aunque la actora cumplía con el requisito de tiempo y edad dichos requisitos se cumplieron con posterioridad a la fecha establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. Que el 26 de junio de 2020 mediante Resolución SUB 136444, Colpensiones reconoció la pensión ordinaria de vejez. Que si la pensión es reconocida según lo dispuesto en la Convención Colectiva, en el ultimo año arroja una mesada pensional para el 2015 de \$2.170.192. Que el 11 de diciembre de 2020 radicó ante la UGPP reclamación administrativa, solicitando reconocimiento y pago de la pensión convencional, reclamación que fue negada nuevamente por la UGPP mediante auto ADP 002151 del 16 de abril del 2021, alegando que no se cumplía con el requisito de la edad.

- **CONTESTACIONES:**

UGPP: Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones elevadas en su contra, al advertir que el acto legislativo 01 de 2005 dispuso que los acuerdos colectivos no podían establecer condiciones más beneficiosas o diferentes para regular las pensiones de los trabajadores. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación y prescripción.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 25 de abril de 2022 el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ que al demandante le asiste derecho a la pensión jubilación convencional regulada clausula 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita por el ISS con sus trabajadores a partir del 4 de mayo de 2018, en cuantía inicial de \$2.550.567, incluyendo los incrementos de ley hasta el 17 de diciembre de 2019. Que el retroactivo asciende a \$55.771.429. Que se

reconozca el mayor valor de mesada pensional de jubilación, en comparación con la pensión de vejez reconocida por Colpensiones a partir del 18 de diciembre de 2019 y de forma vitalicia, incluyendo una mesada adicional por año. Que el retroactivo calculado hasta el 31 de marzo de 2022 asciende a \$35.659.982. Condenó asimismo al pago de la indexación de las sumas reconocidas, calculada desde que cada una de ellas se hizo exigible hasta que se verifique el pago. Autorizó los descuentos en salud. Declaró probada la excepción de improcedencia de intereses moratorios, procedencia del descuento para financiar al sistema de salud y prescripción parcial. Las costas procesales fueron impuestas a cargo de la UGPP, agencias en derecho por la suma de \$3.657.256

- **APELACIÓN**

Demandante: La decisión anterior fue recurrida en apelación por la demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los términos siguientes: Que muestra su inconformidad con lo relacionado a intereses moratorios y retroactivo pensional. Frente a lo primero, considera que estos se establecieron con el objeto de proteger al pensionado o a los beneficiarios de la prestación, cuando se presenta un retardo injustificado en la cancelación de la mesada pensional, por lo que debe reconocerse intereses moratorios desde la fecha en que se elevó la reclamación administrativa. Frente a lo segundo, manifiesta que la demandante realizó reclamaciones oportunas que fueron negadas por la entidad, por lo que el retroactivo debe reconocerse desde la fecha en que se cumplió los requisitos para acceder a la pensión.

UGPP: Sustentó su apelación señalando que los empleados deben haber cumplido con los requisitos antes del 31 de julio de 2010, esto es, 50 años de edad (mujeres) y 20 años de servicio al ISS. Que todo aquel trabajador que haya cumplido con los requisitos con posterioridad al 31 de julio de 2010 no tiene derecho a la aplicación de la Convención puesto que la misma perdió vigencia por lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Que pese a que la demandante cumplió con 20 años de servicio al ISS, solo cumplió los 50 años el 27 de septiembre de 2013, por lo que no es procedente acceder a la petición de pensión de jubilación. Finalmente solicita revocar íntegramente la sentencia de primera instancia, declarar las excepciones propuestas en la contestación de demanda y absolver a la entidad de todas las pretensiones impetras en su contra.

- **CONSULTA:**

Fue enviado el expediente a este Tribunal con el propósito que se conozca del proceso en grado jurisdiccional de consulta con ocasión de las condenas al ISS, hoy UGPP.

- **ALEGATOS:**

Demandante: (...) *“tal como se determinó en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubre un periodo superior a esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.*

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes:

- a) *En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado*

Agrega además que (...) lo que está recomendando el Comité Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Parágrafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y también una regla de transición para garantizar que se satisfagan las expectativas legítimas de pensión.

En este orden de ideas, se dan todos los elementos que tiene la Corte Suprema de justicia, para que las pretensiones que aquí se han formulado sean acogidas y en consecuencia sea CONFIRMADA la decisión de primera instancia con las consecuencias de dicha declaratoria, incluyendo la condena en costas.

CONSIDERACIONES:

Solicita la demandante se le reconozca la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo para los trabajadores del ISS desde que cumplió 50 años de edad; el juzgado del conocimiento accedió a las súplicas de la demanda ordenando el pago de la prestación desde el 4 de mayo de 2018 por haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción.

Atendiendo a la apelación formulada por las partes y que el proceso será conocido en grado de consulta, el problema jurídico para resolver por esta Sala se centrará en los siguientes temas: *i)* aplicación de la convención colectiva de trabajo; *ii)* beneficios convencionales con posterioridad al 31 de julio de 2010 como consecuencia de lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005; *iii)* definir si se encuentran acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión convencional; *iv)* liquidación de la pensión y excepción de prescripción; *v)* Compartibilidad pensional; *vi)* intereses moratorios; y, *vii)* costas procesales.

i) Aplicación de la convención colectiva de trabajo

Se encuentra acreditado con la prueba documental obrante en el expediente que la demandante, señora Dora Cristina Blandón Valencia, laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales -ISS- en calidad de trabajadora oficial, desempeñándose como auxiliar de servicios asistenciales, del 13 de septiembre de 1993 al 31 de marzo de 2015, según se desprende de la certificación emitida por el ISS esta última fecha, visible en la página 11 del PDF “03AnexosDemanda”

Cómo lo pretendido por la actora es el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, se hace necesario aclarar que la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 estaría vigente hasta el 31 de octubre de 2004, salvo las excepciones establecidas en la misma, como lo es el artículo 98 que extiende la vigencia hasta el año 2017. Al respecto dijo la alta corporación:

“En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención lleva al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente”

Mismo criterio que estableció en sentencia SL1409-2015, donde clarificó que solo algunas cláusulas de la referida convención continuarían vigentes más allá del 31 de octubre de 2004, pero únicamente porque la misma convención así lo prevé, y estas cláusulas están relacionadas con derechos pensionales que necesariamente se iban a perfeccionar después del extremo final pactado en la norma convencional. Por ello, en materia pensional a la demandante le es aplicable la convención colectiva de trabajo hasta el año 2017.

ii) Beneficios convencionales con posterioridad al 31 de julio de 2010 como consecuencia de lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005

Se encuentra demostrado que la demandante nació el 27 de septiembre de 1962, por lo que arribó a la edad de 50 años el mismo día y mes de 2012; laboró en calidad de trabajadora oficial al servicio del ISS del 13 de septiembre de 1993 al 31 de marzo de 2015; la Convención Colectiva de Trabajo, la cual cuenta con su respectivo sello de depósito ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio de Trabajo estableció su vigencia general hasta el 31 de octubre del 2004 y no fue objeto de denuncia, de manera que por efecto del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo se prorrogó automáticamente por períodos sucesivos de seis meses; la demandante es beneficiaria de dicha convención.

El Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que empleadores y organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones, pero a fin de no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, se reguló en el parágrafo 3º un período transitorio así:

“Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”

De lo anterior se deducen dos postulados diferentes: *i)* para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición estaban rigiendo, cuya vigencia se mantendrá hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las prórrogas automáticas que se venían surtiendo; y, *ii)* para aquellas convenciones que se establecieran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces

estuvieran vigentes. Frente al primer postulado, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que¹:

“con base en esta lectura del párrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.”

Expuso la Corte que la expresión “*término inicialmente pactado*” aludía al tiempo de duración expresamente acordado por las partes de modo que “*si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara*”, aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010. Y que, con ese alcance interpretativo podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años.

Tal criterio varió en las sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y SL2986-2020, dándose un alcance diferente al párrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, al considerarse de una parte que el término inicialmente pactado no puede extenderse más allá del 31 de julio 2010, y de otro lado que ese plazo también incluye el de la prórroga automática que hubiese comenzado después del 29 de julio de 2005. Al respecto se indicó en la primera de estas sentencias:

*“En los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá **por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo** cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem. De modo que dichos acuerdos en materia pensional se extienden máximo hasta el 31 de julio de 2010...”* negrilla fuera de texto original.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014, al estudiar la compatibilidad de las recomendaciones del Comité del Libertad Sindical adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano debía adoptar “*las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento*”, sostuvo:

*“La primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se **mantengan hasta su vencimiento** los efectos de las convenciones y pactos*

¹ Sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en sentencias CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019.

colectivos cuyo término **haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010**. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del párrafo transitorio tercero cuando indica que "Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, **se mantendrán por el término inicialmente estipulado**". Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el artículo 58 Superior, así como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la Sentencia C-314 de 2004.

[...] Además, como se indicó en precedencia, también con el párrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron **mientras continuara vigente**, y así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo hasta el término de su vencimiento.

Esto es justamente lo que está recomendando el Comité Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Párrafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y también una regla de transición para garantizar que se satisfagan las expectativas legítimas de pensión.

Y todo lo anterior, garantiza también la protección de la negociación colectiva en cuanto no ignora lo hasta ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical". (Negrillas fuera de texto original).

De lo anterior se colige que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubre un período superior al 31 de julio de 2010, debe respetarse al ser voluntad de las partes otorgar mayores garantías a las normas jubilatorias.

Así lo consideró la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al rectificar el criterio adocinado en las sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020. Y a partir de la sentencia SL3635-2020, precisó que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubre un periodo superior al 31 de julio de 2010

"debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.

Así es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o bien porque hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe que atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia.

Ello, porque tal como tantas veces lo ha dicho esta Sala, la convención colectiva de trabajo es una verdadera fuente de derechos y obligaciones por lo menos durante

el tiempo en que la misma o algunas de sus cláusulas conserven su vigencia, de modo que su ámbito de protección cobija los derechos consolidados y trasciende a las expectativas que eventualmente se alcancen durante el término pactado.”

Se recalca, como a partir de esta última sentencia la Sala Laboral de la Corte rectificó parcialmente su criterio en materia de pensiones consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, de modo que las pautas que regulan actualmente el asunto son las siguientes:

“a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.

b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.

c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.”

En el presente asunto el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrado en la convención colectiva de trabajo 2001-2004 que, a su juicio, previó, respecto de algunas cláusulas, una vigencia mucho más amplia que el plazo general. Para verificar lo anterior se tiene que, el artículo 2º de dicho acuerdo colectivo dispone:

“Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”

Así mismo, el artículo 98 regula las reglas para la pensión de jubilación solicitada, así:

“ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN

El trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:

(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.

(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.

(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.

Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:

- a. Asignación básica mensual.
- b. Prima de servicios y vacaciones.
- c. Auxilio de alimentación y transporte.
- d. Valor de trabajo nocturno, suplementario y en hora extras.
- e. Valor de trabajo en días dominicales y feriados.

No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez (...)"

Bajo el contexto anterior se evidencia que, frente al tema de pensión de jubilación, las partes dispusieron una vigencia posterior o diferente a la establecida de forma general, asunto que fue advertido por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1409-2015, así:

"En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría "una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente". Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención lleva (sic) al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente"

Asimismo, en la ya citada sentencia SL3635-2020, donde dicha corporación rectificó parcialmente su criterio, fue clara al indicar la vigencia de la convención:

"En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia."

El criterio jurisprudencial establecido en esta sentencia ha sido reiterado, entre otras, en las siguientes providencias: SL5116-2020, SL2773-2021, SL4163-2021, SL4904-2021. Igual criterio es el acogido por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL4234-2021, SL5131-2021, SL5490-2021, SL595-2022, SL516-2022, SL399-2022, SL595-2022, SL626-2022 y SL042-2023.

La mayoría de los integrantes de esta Sala de Decisión Laboral del Tribunal eran del criterio que un trabajador no podía beneficiarse de pensiones convencionales cuyo estatus se causara con posterioridad al 31 de julio de 2010, en atención al límite referido en el Acto Legislativo 01 de 2005; no obstante, tal criterio merece ser reevaluado en atención a la jurisprudencia del órgano de cierre de la justicia ordinaria. Y es que, al haberse referido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en más de tres (3) oportunidades sobre este asunto, se constituye doctrina probable conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, siendo pertinente resaltar que *“todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades (...) se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional.”*, según lo indicado en la sentencia C-539 de 2011, por lo que este despacho comparte y a su vez continuará acogiendo esta.

iii) *Acreditación de los requisitos para el reconocimiento de la pensión convencional*

Se establecerá si la demandante acredita las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 98 convencional para obtener la pensión de jubilación reclamada.

En el caso concreto deben señalarse los siguientes momentos históricos relevantes: la demandante acreditó 20 años de servicios al servicio del ISS en septiembre de 2013; arribó a la edad de 50 años el 27 de septiembre de 2012; laboró a la entidad hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en que fue liquidada definitivamente.

Como consecuencia de lo anterior se generan los siguientes interrogantes; **1)** ¿a partir de qué momento se causa el derecho a la pensión convencional?; **2)** ¿Es o no beneficiario de la prestación convencional por haber arribado a los 50 años de edad el 27 de septiembre de 2012, cumplir 20 años de servicios al ISS en septiembre de 2013 y haber laborado hasta el 31 de marzo de 2015?

Estos interrogantes fueron resueltos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3343-2020, al interpretarse el artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS, así:

“Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política.

Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adocrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.

Ahora bien, la referida normativa convencional prevé lo siguiente:

El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (...).

En lo que concierne a la interpretación concreta de dicha cláusula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad.

Lo anterior, en tanto si bien el artículo alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos, pues dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en últimas, es lo que exige la norma referida.

Al respecto, es relevante destacar que, en este caso, a la luz de la lectura de la cláusula convencional (art. 98), el derecho pensional allí consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condición futura, connatural al ser humano.

Específicamente, en el marco de las relaciones de trabajo, es un hecho usual, que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como un aliciente a la prestación de los servicios personales en favor de un empleador, de tal suerte que, además de compensar el deterioro laboral, también funcionan como premio a la fidelidad con aquel.

Ahora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación.

Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación.”

De lo anterior se desprende que la pensión convencional se reconocerá cuando la demandante acredite 20 años de servicios y 50 años de edad; no obstante, el derecho puede ser adquirido cuando al momento del retiro el extrabajador tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad, por cuanto es con el primero de estos que se adquiere la prestación, pues esta tiene como finalidad compensar el desgaste físico sufrido por el trabajador como consecuencia de los años de servicios. Y, frente a la edad, es una condición futura, connatural al ser humano.

En la sentencia SL3343-2020, acabada de citar, la Corte advierte que, si bien frente a la interpretación que debe dársele al artículo 98 de la convención, es a partir de esta sentencia que se fija la forma como debe interpretarse tal artículo.

Así las cosas, acogida la interpretación del órgano de cierre, es acertada la decisión tomada por el juzgado del conocimiento, esto es, que la pensión convencional se adquirió en el año 2013, una vez la señora Dora Cristina Blandón Valencia acreditó 20 años de servicios como trabajadora oficial, toda vez que para tal fecha acreditaba más de 50 años de edad. En este escenario, le asiste derecho al demandante a la pretendida pensión de jubilación convencional.

iv) Liquidación de la pensión y excepción de prescripción

Para liquidar el valor de la mesada pensional, el artículo 98 de la convención colectiva señala que esta será el 100 % del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio, teniendo en cuenta los siguientes factores de remuneración: a) Asignación básica mensual; b) Prima de servicios y vacaciones; c) Auxilio de alimentación y transporte; d) Valor de trabajo nocturno, suplementario y en hora extras; y, e) Valor de trabajo en días dominicales y feriados.

El juzgado del conocimiento acogió la liquidación aportada por la actora con su escrito de demanda, en la que se relacionan los conceptos antes mencionados, además de las vacaciones.

Erró entonces el a quo al contabilizar para efectos de la liquidación las vacaciones, pues estas no hacen parte del texto del artículo 98 antes mencionado. Nótese además, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tampoco no tiene en cuenta las vacaciones como factor de remuneración para liquidar la mesada en estos asuntos. Al respecto, puede consultarse la sentencia SL626-2022.

En este orden de ideas, el valor de la mesada por concepto de pensión de jubilación convencional, reconocida a partir del 1° de abril de 2015, asciende a **\$2.059.967** y no \$2.170.192 como se indicó en la sentencia apelada. Siendo procedente en este sentido **MODIFICAR** la decisión de instancia.

Previo a realizar pronunciamiento acerca del valor por concepto de retroactivo pensional se hace necesario estudiar la excepción de prescripción propuesta por la demandada.

Alega la demandante que no debe proceder el medio excepción de la prescripción, por lo que la prestación le debe ser reconocida desde que tuvo derecho a esta.

Pues bien, el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 4° de la ley 712 de 2001, referente a la reclamación administrativa, establece que las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Añadió el artículo que mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.

A su turno, el artículo 151 de la misma codificación establece que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Debe precisarse en este punto de la providencia la diferencia entre interrupción y suspensión de la prescripción. El primero de los términos da lugar con el simple reclamo escrito ante la entidad, lo que genera como consecuencia que la prescripción se interrumpa por un término de tres años; el segundo de los términos refiere a que, mientras se agota la reclamación administrativa, el término prescriptivo se suspende, lo que conlleva a que, una vez se dé dicho agotamiento, el término de prescripción comenzará a contabilizarse.

La demandante elevó tres solicitudes ante la UGPP del reconocimiento de la pensión de jubilación convencional. Del contenido de la resolución RDP 008396 del 3 de marzo de 2015 se desprende que la primera de ellas se radicó el 8 de octubre de 2014; la segunda de las reclamaciones tuvo lugar el 22 de abril de 2015 según se lee del contenido de la resolución RDP 03526 del 31 de agosto de 2015; finalmente, la última de las reclamaciones se realizó el 15

de diciembre de 2020 según el contenido de la resolución ADP 002151 del 16 de abril de 2021.

Si bien la prescripción se interrumpe por una vez, esta se contabilizará desde el agotamiento de la reclamación realizada 8 de octubre de 2014, toda vez que para tal época ya existía en cabeza de la demandante el derecho a la prestación de jubilación; de otra parte, la demanda fue presentada por fuera del término trienal de prescripción de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ya que esta se promovió el 3 de mayo de 2021, por lo que se verán afectadas por este fenómeno extintivo aquellas prestaciones causadas con anterioridad al mismo día y mes de 2018.

v) *Compartibilidad pensional*

Mediante resolución SUB 136444 del 26 de junio de 2020, Colpensiones le reconoció a la demandante la pensión legal de vejez a partir del 18 de diciembre de 2019, en cuantía mensual para esa anualidad de \$1.480.631.

Esta Sala del Tribunal comparte el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corporación que señaló que la compartibilidad pensional opera por ministerio de la ley, sin necesidad de declaratoria judicial. Así se pronunció tal corporación en sentencia SL4342-2022:

“Sobre el particular es preciso reiterar que la compartibilidad pensional opera por ministerio de la ley, «esto es, sin necesidad de declaratoria judicial en virtud del artículo 18 del Decreto 758 de 1990» (CSJ SL4278-2017). Por tanto, si en el futuro el demandante adquiere el derecho a la pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 1993, por mandato directo del artículo 18 del Decreto 758 de 1990 la entidad está autorizada para decretar la compartibilidad entre la pensión de jubilación convencional y la de vejez reconocida por Colpensiones, sin que para ello requiera una orden judicial.”

En este orden de ideas, a cargo de la UGPP estará la obligación de pagar las mesadas por concepto de pensión de jubilación convencional desde el 3 de mayo de 2018 al 17 de diciembre de 2019; a partir del día siguiente, esto es, 18 de diciembre de 2019, la UGPP deberá pagar la diferencia entre la pensión convencional y la legal de vejez.

Conforme a los parámetros advertidos, la demandada deberá pagar las siguientes sumas de dinero: **\$52.994.757** por mesadas pensionales causadas del 3 de mayo de 2018 al 17 de diciembre de 2019; **\$46.705.394** por la diferencia entre la pensión convencional de jubilación y la legal de vejez desde el 18 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2023; también estará a cargo de la UGPP continuar pagándole a la demandante la diferencia entre ambas

pensiones a partir del 1° de abril de 2023, de forma vitalicia, a razón de 13 mesadas al año.

RETROACTIVO A CARGO DE LA UGPP				
Año	IPC	Valor reconocido	# mesadas	Total retroactivo
2015	6.77%	\$ 2,059,967		\$ -
2016	5.75%	\$ 2,199,427		\$ -
2017	4.09%	\$ 2,325,894		\$ -
2018	3.18%	\$ 2,421,023	8.93	\$ 21,619,734
2019	3.80%	\$ 2,498,011	12.56	\$ 31,375,023
TOTAL				\$ 52,994,757

REAJUSTE PENSIONAL A CARGO DE LA UGPP						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2019	3.80%	\$1,480,631	\$2,498,011	\$1,017,380	0.44	\$ 447,647
2020	1.61%	\$1,536,895	\$2,592,936	\$1,056,041	13	\$ 13,728,531
2021	5.62%	\$1,561,639	\$2,634,682	\$1,073,043	13	\$ 13,949,560
2022	13.12%	\$1,649,403	\$2,782,751	\$1,133,348	13	\$ 14,733,526
2023		\$1,865,805	\$3,147,848	\$1,282,043	3	\$ 3,846,130
TOTAL						\$ 46,705,394

vi) Intereses moratorios

En lo que tiene que ver con la inconformidad presentada por la parte actora en lo que respecta a los **intereses moratorios**, es claro que estos fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo por la obligación que tiene la entidad de seguridad de reconocer las mesadas pensionales oportunamente; sin embargo, opera frente aquellas pensiones reconocidas con sujeción a dicha normatividad, dejando por fuera las que tienen su origen en convenciones colectivas de trabajo. Así las cosas, no procederá condena alguna frente a este concepto.

En asuntos similares al que ocupa a esta Sala, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia también ha negado el reconocimiento de los intereses de mora, por tratarse de una pensión convencional. Así lo manifestó en sentencia SL595-2022:

“Se negará la pretensión por intereses de mora, como quiera que el reconocimiento de la prestación surge en aplicación del nuevo criterio jurisprudencial adoptado por la Sala en CSJ SL3343-2020 y CSJ SL3635-2020, y porque se trata de una pensión convencional (CSJ SL5012-2021). En su lugar, deberá ser indexado por haberse afectado por el transcurso del tiempo, para lo cual aplicará la fórmula indicada por la jurisprudencia, esto es:”

Ahora, con relación a la indexación de las condenas, es de advertir que los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el empleador o la entidad de seguridad social debe al trabajador o pensionado, y por lo tanto la doctrina y la jurisprudencia acuden a la corrección monetaria con el fin de procurar que el pago de lo debido sea cabal, íntegro o completo, o dicho en otros términos que el deudor cubra la prestación en su valor real.

Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL359-2021, con radicado 86405 ha expresado:

“...Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real.

Desde este punto de vista, cuando el juez del trabajo advierte un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de prestaciones económicas derivadas del sistema de pensiones, su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros; tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza, en el marco de la protección especial a la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda...”

En este escenario, es acertada la decisión del juzgado del conocimiento de condenar a la demandada al pago de la indexación de las mesadas pensionales objeto de esta sentencia, con base en la certificación mensual del Índice de Precios al Consumidor –IPC-, expedida por el DANE, entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago.

vii) Costas procesales y alegatos

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. En la segunda instancia no se causaron debido a que las apelaciones formuladas por las partes no salieron adelante.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por la demandante.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **MODIFICA** parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta. En su lugar, este numeral quedará de la siguiente manera:

*“Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP- a reconocer y pagar en favor de DORA CRISTINA BLANDÓN VALENCIA la pensión de jubilación consagrada en la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita por el ISS con sus trabajadores a partir del 3 de mayo de 2018, en cuantía inicial para esta anualidad de \$2.421.023, incluyendo los incrementos de ley hasta el 17 de diciembre de 2019. El retroactivo asciende a **\$52.994.757.**”*

SEGUNDO: Se **MODIFICA** parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia. En su lugar, este numeral quedará de la siguiente manera:

*“Condenar a la DEMANDADA a reconocer y pagar a favor del (de la) DEMANDANTE el mayor valor de la mesada pensional de jubilación, en comparación con la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES, a partir del 18 de diciembre de 2019 y de forma vitalicia incluyendo una mesada adicional por año. El retroactivo calculado hasta el 31 de marzo de 2023 asciende a **\$46.705.394**”*

TERCERO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

CUARTO: Costas procesales como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Dora Cristina Blandón Valencia
DEMANDADO	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP-
RADICADO	05-001-31-05- 021-2021-00182-01
DECISIÓN	Confirma y modifica sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 16 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 16 de marzo de 2023 a la 5:00 pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO